

**DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
Sistema de Alertas Tempranas – SAT**

INFORME DE RIESGO N° 018-09

Fecha: 21 de julio de 2009

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana		Zona Rural		Territorio Étnico
		Cabecera, localidad o zona	Barrios	Centros Poblados	Veredas	Resguardo
ARAUCA	Saravena		Alfonso López, modelo, Cochise, Jardín, Galán, 6 de Octubre, José Vicente, Pinzón, Montebello, El Prado, Ciudad Universitaria, San Luis, Villa Fanny, las Flores, La Esperanza, Cofavi, 4 de Diciembre.	<i>Puerto Nariño, Puerto Lleras, Puerto Contreras, Caño Seco, Rancho Pilon.</i>	Campo Oscuro, Caño Negro, Buenos Aires, La Pava, Las Vegas, El Pescado, Puerto Rico, Charo Alto, Charo Centro, El Dique, Monte Adentro, Brisas del Banadía, Banadía II, La Unión, Agua Santa, Caño Negro, Caño Rojo, La Pajuela, La Chucua, Alto Caño Rojo, La Capillas, Puerto Arturo, Caño Claro, Banadía Medio, Bajo Banadía, Brisas del Satocá, Campo alegre, Satocá, Miramar, Unión alto Satocá, San Miguel, Bocas del Bojabá, Playas del Bojabá, La Pavita, Alto la Pava, San Joaquín, San Miguel, Caño Esmeralda, Alto Satocá, Calafitas, Los Duarte, Los Alpes, Campo Hermoso, La Colorada, Barrancones.	Playas del Bojabá, Unkaría, Chiravaquia, Calafitas I y II, San Miguel.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas



Afrodescendientes



Otra población



Aproximadamente 7.000 habitantes del municipio Saravena, residentes en la zona urbana del municipio, en los barrios: El Centro, Alfonso López, Modelo, Cochise, Las Villas, Los Alpes, Jardín, Galán, 6 de Octubre, Gaitán, Santander, Las Palmeras, José Vicente, Pinzón, Montebello, Pablo Hernández, El Prado, Ciudad Universitaria, San Luis, Villa Fanny, Las Flores, Salinas, San Jorge, La Esperanza, Cofavi, Versalles y 4 de Diciembre.

De igual manera, se encuentran en riesgo cerca de 8.000 personas que habitan en los centros poblados de: Puerto Nariño, Puerto Lleras, Puerto Contreras, Caño Seco y de las veredas Campo Oscuro, Caño Negro, Buenos Aires, La Pava, Las Vegas, El Pescado, Puerto Rico, Charo Alto, Charo Centro, El Dique, Monte Adentro, Brisas del Banadía, Banadía II, La Unión, Agua Santa, Caño Negro, Caño Rojo, La Pajuela, La Chucua, Alto Caño Rojo, La Capillas, Puerto Arturo, Caño Claro, Banadía Medio, Bajo Banadía, Brisas del Satocá, Campo alegre, Satocá, Miramar, Unión alto Satocá, San Miguel, Bocas del Bojabá, Playas del Bojabá, La Pavita, Alto la Pava, San Joaquín, San Miguel, Caño Esmeralda, Alto Satocá, Calafitas, Los Duarte, Los Alpes, Campo Hermoso, La Colorada, y Barrancones.

También se hallan en riesgo los miembros y representantes de los pueblos indígenas de Playas del Bojabá, Unkaría, Chiravaquía, Calafitas, Valle del Sol; las familias en condición de desplazamiento ubicadas en el casco urbano de Puerto Nariño y en la zona urbana del municipio, los servidores públicos, directivos y periodistas de la emisora comunitaria Sarare - Stereo, los ganaderos, comerciantes, líderes y lideresas sociales y comunitarias y líderes de organizaciones de población desplazada.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO

La presencia histórica de las guerrillas en este municipio se explica por el interés geoestratégico que representa el control del territorio como corredor de movilidad que comunica directamente la cordillera oriental con los llanos orientales y a la sabana con los departamentos de Santander y Norte de Santander, el Alto Apure y el Estado Táchira en la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo su articulación con los bloques y frentes desplegados en estas zonas, como también para obtener recursos y financiación provenientes de actividades lícitas (la explotación petrolera, la ganadería, la agricultura y el comercio) e ilícitas (contrabando y narcotráfico). Las guerrillas se han aprovechado históricamente de la crisis y la fractura social de este departamento, así como de la debilidad institucional, buscando cooptar organizaciones y líderes sociales, al mismo tiempo que han instaurado un sistema de exacciones forzosas que ha implicado el desangre del erario público, todo ello enfocado al sostenimiento y la expansión de su aparato político - militar.

El principal escenario de riesgo está configurado por las hostilidades entre las guerrillas de las Farc y el ELN, por el control territorial y poblacional del Departamento, las cuales realizan constantes incursiones a zonas de dominio del grupo oponente, sosteniendo combates, mientras que a través de la red de milicias profieren amenazas, intimidan, cometen homicidios, siembran minas antipersonal y causan desplazamiento forzado, entre otras acciones violentas. Se evidencia en el comportamiento de estos grupos armados un control fragmentario de la violencia y del poder sobre la población y el territorio, lo que ha llevado a que las comunidades deban sujetarse a un juego en el que participan de oportunidades o son obligadas a lealtades y a aportar recursos a un actor en detrimento del otro. Estas conductas de los grupos armados evidencian un control relativo del territorio, en el cual la violencia se ha convertido en un recurso estratégico que se aplica de manera selectiva e indiscriminada, conforme se miden las fuerzas de los oponentes.

Esta lógica, que apunta al control social y territorial por medio del terror y la intimidación del contrario, se expresa a través del señalamiento individual y colectivo de los pobladores como colaboradores del grupo armado opuesto o de la Fuerza Pública, lo que trae como consecuencia directa, desplazamientos individuales, familiares y colectivos, amenazas, homicidios y desapariciones. Dichos señalamientos tienen relación, en el caso de la Fuerza Pública, con la utilización de miembros de la población civil en la red de informantes o cooperantes, lo que con frecuencia deriva en amenazas o atentados de la guerrilla contra la persona que participa en estas actividades. Así mismo, la estigmatización de la población civil también se expresa en situaciones como la presencia temporal de un actor armado en determinado sector o vereda, (con ocupación de viviendas y escuelas), como retaliación por oponerse a la presencia de los grupos armados, por denunciar conductas punibles o, por tratar de hacer efectivos los derechos de las víctimas (ver al respecto el Auto 004 de 2008 -Corte Constitucional-, que hace referencia a la protección de derechos fundamentales de la población afectada por el conflicto armado).

La población identifica como amenaza latente los patrullajes que realizan, al parecer algunos miembros de organismos de inteligencia del Estado vestidos de civil, armados y en motocicletas de alto cilindraje sin placas, en la zona urbana de Saravena, situación que se presta para confusiones con grupos armados al margen de la ley.

El homicidio como una de las expresiones más brutales de la violencia y el conflicto, produce uno de los mayores impactos en la población civil. Las víctimas de los homicidios en Saravena, suelen ser personas que han sido consideradas colaboradoras o auxiliadoras de uno u otro grupo armado, dentro de la estrategia de eliminar supuestas “bases sociales” del enemigo.

Por efecto del terror que producen estas acciones, un gran número de ciudadanos ha cruzado la frontera con el fin de salvaguardar su vida y la de su familia, sin embargo, los actores armados ilegales también hacen presencia en el lado venezolano, lo que lleva a que al parecer algunas personas sean secuestradas por éstos y devueltas a territorio colombiano, apareciendo posteriormente asesinadas a orillas del río Arauca. Durante el año 2009 se reseñan por lo menos 5 casos, entre ellos el homicidio de José Jairo el 10 de febrero en la vereda el Dique, de Edilberto Salcedo Rojas, asesinado por desconocidos el 6 de abril en la vereda Puerto Lleras, de John Jairo

Monterrey y de Marcos Merchán Hernández el 12 de Abril de 2009; preocupa también el número alto de personas sin identificar, asesinados en este municipio, en los últimos meses (4).

Las amenazas e intimidaciones generalmente están dirigidas contra servidores públicos, a quienes en varias ocasiones han declarado objetivo militar por representar al Estado, así mismo, contra líderes y lideresas sociales y de población desplazada que manifiesten independencia organizativa frente a actores armados y contra periodistas que se niegan a publicar en sus medios los comunicados de la insurgencia. La violencia y las amenazas en la mayoría de los casos ocasionan desplazamiento forzado de la zona rural a la urbana, hacia otros municipios y departamentos o hacia Venezuela.

Por otra parte, el uso indiscriminado de minas antipersonal (MAP) por parte de la guerrilla del ELN y de las Farc, expone a la población civil a sufrir incidentes y accidentes, varios de los cuales han provocado la pérdida de vidas humanas así como graves lesiones a la integridad física y psicológica de la población que reside o debe movilizarse en medio de campos minados.

Estos artefactos son ubicados alrededor de lugares estratégicos como carreteras y caminos, en cercanías a escuelas y casas abandonadas; algunas zonas minadas por la guerrilla impiden el acceso a fuentes de agua y al desarrollo normal de las actividades agropecuarias. Las informaciones dan cuenta de la presencia de minas antipersonal en las zonas sub-urbana del municipio, específicamente en el barrio Cofavi y en las veredas limítrofes con el municipio de Fortul. Un ejemplo fue la tragedia de la familia Pérez Valencia cuyos integrantes cayeron en un campo minado en inmediaciones del barrio Cofavi, el 13 de abril del presente año, hecho en el que murió José Asunción Pérez padre de familia y su hijo Cristian Eduardo de 9 años, mientras que resultaron heridos la esposa y madre de las víctimas, señora Mary Lucrecia Valencia y su pequeño hijo menor Brayan de 6 años de edad. Así mismo, los constantes combates entre la Fuerza Pública y los grupos guerrilleros incrementan el riesgo para la población civil por las municiones sin explotar que quedan luego de las confrontaciones. En la mayoría de los casos, por falta de información, muchas de las víctimas no logran acceder oportunamente a la atención de urgencias, así como a procesos de rehabilitación física y psicológica, rehabilitación laboral y reincorporación social, subsidios e indemnizaciones consagrados en la ley.

En el municipio Saravena son frecuentes los ataques indiscriminados que afectan indistintamente a objetivos militares y personas o bienes de carácter civil, en los que se emplean métodos y medios de combate que no se dirigen contra un objetivo militar concreto o cuyos efectos no es posible limitar. Se consideran indiscriminados, la utilización por parte de la insurgencia de morteros tipo cilindro-bomba y los constantes bombardeos por parte de la Fuerza Pública en cercanías a centros poblados. Estos hechos podrían causar incidentalmente muertos y heridos entre la población y daños a bienes de carácter civil, violando el principio de distinción establecido en el DIH; basta citar el atentado contra una patrulla policial, el 21 de Enero de este año, en el que resultaron heridos 3 agentes de la institución y una persona civil.

Así mismo, son frecuentes los atentados con artefactos explosivos cometidos contra bienes y personas protegidas, como fue el caso del ataque con bombas contra el edificio "Héctor Alirio

Martínez" el 19 de noviembre del año pasado, edificio en el que se ubican las oficinas de la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (ASOJER), la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), la Asociación de Desplazados, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Subdirectiva Arauca y la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Así mismo, fue lanzada una granada por desconocidos contra una edificación frente a las Instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que dejó daños materiales, el 15 de enero del año en curso.

La práctica del secuestro político y extorsivo por parte de la guerrilla es un factor de riesgo para ganaderos, comerciantes y funcionarios o contratistas del municipio. En el año 2008 se presentaron cinco casos de secuestros, entre ellos el del Notario Único de Saravena, Carlos Humberto Barajas, plagiado el 16 de Diciembre de 2008, en la zona urbana del Municipio, al parecer por el Frente 10 de las Farc y liberado días después en zona rural de Arauquita.

Los grupos insurgentes en su afán de fortalecer sus tropas ante las continuas bajas y desertiones, han optado por el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, quienes al no tener oportunidades de estudio o trabajo ven el enrolamiento en los grupos armados como una oportunidad de reconocimiento social y generación de ingresos. Así mismo, los niños, niñas y adolescentes son utilizados ilícitamente como informantes o mensajeros por los grupos armados ilegales. En este municipio, les está terminantemente prohibido a las mujeres entablar relaciones con los miembros de la Fuerza Pública, so pena de ser tachadas de informantes, desterradas o asesinadas por los grupos armados, como ha ocurrido en años anteriores.

Los grupos armados ilegales también han declarado objeto de ataque a niñas y adolescentes en situación de desplazamiento que al parecer hacen parte de una red de explotación sexual ("pre-pago"), ligada además al expendio y consumo de estupefacientes en la zona de tolerancia de la localidad.

Un segundo escenario de riesgo lo configuran las amenazas provenientes de grupos armados al margen de la Ley, autodenominados "AUC-Arauca" o "Águilas Negras". En el mes de noviembre del 2008 aparecieron grafitis alusivos a las extintas AUC en algunos barrios de la localidad y profirieron amenazas a través de llamadas y envío de mensajes de texto por celular a comunicadores de la localidad. Igualmente, supuestos integrantes de estos grupos hicieron circular un panfleto donde amenazaban de muerte a consumidores de droga, prostitutas, homosexuales, lesbianas, ladrones y abusadores de menores, con el argumento de que se trata de un servicio de "protección y limpieza social". La comunidad y algunas autoridades consideran que miembros de estos grupos ilegales podrían ser los responsables de las llamadas telefónicas extorsivas realizadas a comerciantes y ganaderos en las que piden tarjetas prepago de telefonía, medicamentos para tratar enfermedades tropicales, armas y municiones.

En virtud del panorama descrito, es altamente probable el riesgo de que se continúen presentando violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al derecho internacional humanitario que afecte a la población civil que habita la zona urbana y rural del municipio de Saravena y que se podrían materializar en homicidios selectivos y de configuración múltiple (masacres), amenazas e

intimidaciones contra servidores públicos, líderes sociales, dirigentes políticos y sindicales, periodistas y comerciantes, violencia sexual contra niñas y mujeres, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar, retenciones ilegales, toma de rehenes, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, atentados contra la infraestructura petrolera y energética, ataques indiscriminados, destrucción contra bienes civiles y desplazamientos forzados.

2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA ZONA

FARC ☒ ELN ☒ OTRO: ☒ Grupos armados ilegales post-desmovilización de las AUC.

3. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DE LA AMENAZA

FARC ☒ ELN ☒ OTRO: ☒ Grupos armados ilegales post-desmovilización de las AUC.

4. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.

- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LA POBLACIÓN CIVIL (retenciones ilegales, tomas de rehenes, homicidios selectivos y múltiples).
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES BÉLICAS (Accidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar, ataques indiscriminados y enfrentamientos con interposición de población civil).
- DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL.
- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL.
- RECLUTAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO FORZADO.
- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS O MEDIOS PARA GENERAR TERROR EN LA POBLACIÓN CIVIL (Amenazas a grupos sociales)

5. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS:

- A LA VIDA
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL
- A NO SER DESAPARECIDO
- A LA LIBERTAD PERSONAL
- A NO SER DESPLAZADO
- A LA LIBRE CIRCULACIÓN
- A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA

VALORACIÓN DEL RIESGO

El municipio Saravena, en el departamento Arauca, limita al Norte, con la República Bolivariana de Venezuela, desde la desembocadura del río Bojabá en el río Arauca hasta la inspección de Puerto Lleras, siendo límite natural el río Arauca. Por el oriente limita con los municipios Arauquita y Fortul, al

Occidente con el municipio Cubará, sobre la cuenca del río Bojabá, en Boyacá y al Sur nuevamente con el municipio Fortul. Saravena cuenta con una superficie de 658.7 km², equivalente al 2.79% del departamento Arauca. La cabecera municipal se encuentra situada a 200 msnm, con una temperatura promedio de 25.5° C, y relieve plano en su gran mayoría, con un potencial hídrico muy importante representado en sus ríos, caños, esteros y lagunas.

Saravena cuenta con una población de 43.412 habitantes, de los cuales 29.320 viven en la zona urbana y 14.412 en la zona rural, según datos del Censo DANE 2005, sin embargo la oficina del SISBEN registra una población de 50.688 (25.472 hombres y 25.216 mujeres). La distribución de la población por edades ubica el mayor porcentaje entre los 15 y 44 años de edad. Los habitantes de Saravena en su mayoría son colonos que provienen de regiones como: Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, la Costa Atlántica y Pacífica. Hacen parte de la población, las comunidades indígenas U'wa de Playas del Bojabá, Unkaría, Chiravaquía, Calafitas I y II, San Miguel; ubicadas en el occidente del Municipio, en las estribaciones de la cordillera oriental.

La principal actividad económica es la producción agrícola, destacándose los cultivos de cacao, plátano, yuca, maíz y cítricos; asimismo, abunda la producción en cultivos de pan-coger. La ganadería aparece como segunda actividad económica, representada en la cría de ganado de carne, leche o doble propósito; la cría de especies menores, tiene importancia en menor escala. La explotación de hidrocarburos no es un renglón importante de la economía de Saravena, pues a pesar de constituir un importante eje que ha contribuido a las finanzas departamentales, no se refleja en los proyectos de desarrollo municipal. Debe recordarse que el auge petrolero que despertó este territorio tomó por sorpresa tanto al Gobierno Nacional como a la dirigencia araucana quienes no contaban con una infraestructura institucional capacitada para administrar eficiente y eficazmente los cuantiosos recursos financieros que ingresaron a sus arcas, lo que trajo como consecuencia la corrupción y el despilfarro, a lo cual se sumaron las exacciones impuestas por los actores armados.

Saravena no cuenta con desarrollo industrial ni empresarial, solamente existen algunas microempresas entre las se destacan, procesadoras de leche, de frutas, talleres metal mecánicos, ebanistería, mecánica, confecciones, entre otras. La ganadería al igual que la agricultura forma el renglón básico en la economía del Sarare, en tanto que esta región ofrece grandes posibilidades para la explotación de actividades agropecuarias que pudieran contribuir al desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el abandono histórico por parte del Estado ha perpetuado la condición de marginalidad y pobreza, fenómenos que ni siquiera con la inmensa bonanza petrolera, se lograron superar. Como consecuencia, la población de este municipio sigue presentado un elevado índice de necesidades básicas insatisfechas de más del 30%, de acuerdo con el DANE, situación que se refleja en la nula o escasa cobertura de servicios básicos en el área rural y nimias perspectivas socioeconómicas para sus habitantes.

La historia de Saravena ha estado marcada por la violencia en donde la sociedad se ha enfrentado a la dualidad entre lo irregular "grupos subversivos" y la legitimidad del Estado. En lo estructural Arauca expresa la inexistencia de un proyecto político y cultural articulado con el proyecto de Estado-Nación. Esta debilidad se expresa en una situación de anomia generalizada de la sociedad, la fragmentación del poder, los conflictos regionales y en la irrupción de formas de desinstitucionalización y deslegitimación

del Estado. En este sentido, las condiciones de abandono institucional del territorio, su histórico aislamiento de los principales centros urbanos y la precaria presencia de las instituciones, han atraído históricamente a organizaciones ilegales que se encontraban en proceso de expansión y copiamiento de territorios marginales, facilitando el apalancamiento de sus fines estratégicos en el marco del conflicto armado.

Saravena junto con los municipios Arauquita y Arauca, formó parte de la Zona de Rehabilitación y Consolidación decretada por el Gobierno Nacional en agosto de 2002, que buscaba contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados al margen de la ley y devolver la institucionalidad del Estado en poblaciones cooptadas por las fuerzas irregulares. La normatividad que reglamentó dicha zona aumentó el riesgo para la población civil y acrecentó los hechos de violencia en este municipio; la Corte Constitucional declaró inexecutable dicha disposición.

La condición de territorio fronterizo, le ofrece a los grupos armados ilegales condiciones favorables para el despliegue - repliegue y las tácticas de combate. Esta área del departamento de Arauca se ha convertido en una zona estratégica en la medida en que ofrece las condiciones necesarias para el movimiento de tropas, abastecimiento y corredor de movilidad entre la cordillera oriental, la sabana y la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Los grupos guerrilleros de las Farc y el ELN conocen bien esos corredores lo que les brinda ventajas militares y una constante articulación con las compañías o cuadrillas desplegadas en la cordillera, el piedemonte, la sabana y la frontera.

Durante muchos años los grupos armados ilegales en Arauca tuvieron como fuente de financiación las extorsiones a la industria petrolera. En el caso del ELN, las cuantiosas sumas de dinero provenientes de las regalías por la explotación petrolera del campo de Caño Limón, le permitieron consolidarse como el segundo grupo guerrillero del país y afincarse en la zona del piedemonte Araucano. Según cifras oficiales, en décadas pasadas, por lo menos el 40% de dichas regalías financiaron la actividad guerrillera.

También han atraído a estos grupos ilegales, las condiciones favorables que ofrece la región para la implementación de cultivos de uso ilícito, a los que se llegó como resultado del deterioro de las condiciones de vida y la falta de alternativas sociales de la población, la necesidad de los grupos armados de buscar fuentes alternativas de ingresos a las exacciones de las regalías petroleras, la cercanía con la frontera venezolana que facilitaba el tráfico de insumos y estupefacientes y la distancia y el aislamiento geográfico del municipio.

Saravena fue uno de los municipios con mayor extensión de cultivos de hoja de coca, pero estos han disminuido ostensiblemente en las zonas planas del municipio, debido a las fumigaciones aéreas con glifosato por parte de la división antinarcóticos de la Policía Nacional, aunque parecen incrementarse en las zonas medias de la cordillera en límites con el Departamento de Boyacá.

Adicionalmente, esta área es de importancia estratégica en la medida en que los grupos armados ilegales mantienen influencia en las poblaciones ubicadas en la frontera con Venezuela; según denuncias de las autoridades colombianas, las guerrillas se repliegan hacia territorio fronterizo una vez ejecutan hechos de violencia o acciones bélicas de este lado de la frontera. De igual manera, la guerrilla aprovecha las condiciones de navegabilidad del río Arauca para traficar estupefacientes y transportar

material de intendencia y aprovisionamiento para sus frentes y compañías.

Si bien, tanto el ELN como las Farc mantuvieron durante varios años una relación de coexistencia, en el control de sus territorios y fuentes económicas, (no despojada de diferencias y enfrentamientos), varios factores llevaron en la década actual a desatar la confrontación militar entre estos grupos. En primer lugar, las medidas implementadas en el marco de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional, implicaron el fortalecimiento de la presencia y la respuesta militar y policial así como el paso a estrategias ofensivas, en zonas que hasta ese momento habían sido de exclusiva presencia insurgente. En segundo lugar, y de manera simultánea, la presencia e influencia paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia – BVA- que, como es conocido, implementó estrategias de amedrentamiento y violencia contra supuestas bases sociales de la guerrilla, al mismo tiempo que entro a disputar los flujos de rentas de las administraciones locales, así como otras actividades económicas, lícitas e ilícitas que eran monopolio de la insurgencia. Dos rubros en particular afectaron las finanzas guerrilleras, por una parte, la disputa del control sobre cultivos de coca, sumada al impacto de los programas de erradicación; por otra, las exacciones sobre las regalías petroleras que entraron a ser intervenidas por nuevos actores armados.

Municipio	Censo 2001	Censo 2002	Censo 2003	Censo 2004	Censo 2005	Censo 2006	Censo 2007
ARAUQUITA	1.685	1647	294	939	1.165	775	1.090
FORTUL	338	165	71	252	249	158	519
PUERTO RONDÓN	53	34	0	10	36	50	18
SARAVENA	167	55	77	98	184	126	192
TAME	506	314	96	253	249	197	297

Hectáreas con cultivos de coca: Fuente SIMCI

Estos factores redujeron los espacios de acción y movilidad de las guerrillas en sus propios territorios, al mismo tiempo que diezmaron su influencia social y armada, efecto, entre otros, de la disminución del flujo de rentas y exacciones. Al quedar restringidos en sus espacios, los grupos guerrilleros se vieron obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos y a intentar cooptar nuevas poblaciones para lo cual deciden incursionar en territorios del bando contrario, desatándose disputas intestinas a finales de 2005 y comienzos de 2006, que se vuelven abiertas y cruentas en la actualidad, siendo el municipio de Saravena uno de sus principales escenarios, así como el territorio fronterizo, que ofrece condiciones naturales para el avituallamiento y el refugio y la expansión económica y militar, asegurando la movilidad táctica de dichas organizaciones armadas.

La situación de violencia que prevalece en el municipio de Saravena expone a los habitantes a sufrir de manera sistemática violaciones a los derechos fundamentales. Los enfrentamientos armados y la disputa entre las guerrillas de las Farc y el ELN, cuyo objetivo es controlar los corredores estratégicos, sobre todo las vías que conducen a los departamentos de Santander y Norte de Santander, las vías y caminos fronterizos con Venezuela (el curso del río Arauca), constituyen el principal escenario de riesgo para la población civil. El interés de estos grupos armado ilegales, es el de controlar el flujo de combustibles, las mercancías de contrabando, los precursores químicos para la elaboración de alcaloides, el tráfico de insumos y el control de los recursos provenientes de la explotación del petróleo.

Como consecuencia de esta confrontación es posible que se incrementen los homicidios de civiles, ya sea que resulten víctimas del fuego cruzado o porque sean considerados como colaboradores o auxiliares del grupo guerrillero contendiente dentro de la estrategia de eliminar supuestas bases sociales del enemigo. Es probable que las amenazas y homicidios se dirijan contra los líderes comunitarios, directivos de las Juntas de Acción Comunal y docentes de escuelas y colegios, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos y personas que colaboren directa e indirectamente con la administración local, al considerárseles como parte de la estructura de un Estado que tales grupos consideran ilegítimo. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal – Arauca-, durante el año (2008) fueron asesinadas 103 personas y en lo corrido de 2009, 24 quienes en un alto porcentaje eran hombres en edad productiva, de los cuales han sido asesinados 10 en la zona rural y 14 en la zona urbana, la mayoría por impactos con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato.

De acuerdo con información de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Saravena es uno de los municipios de mayor recepción de población en situación de desplazamiento. En el año 2008, este municipio recibió un promedio de 2.585 personas para un total de 7.511 y expulsó a 1.031 personas, para un total de 6.460 en los últimos años. En los dos primeros meses de 2009 se recibieron 45 declaraciones por desplazamiento forzado. Lo anterior indica el deber apremiante para las instituciones competentes de tomar medidas de prevención, protección y atención, con enfoque diferencial, para la población en situación de desplazamiento, en donde las mujeres y los niños, quienes son los principales sobrevivientes, terminan asumiendo las responsabilidades familiares, en un contexto de alta exposición y vulnerabilidad social (Elementos contenidos en los Autos de la Corte Constitucional 092 y 251 de 2008 y, 004 y 008 de 2009, en el marco de la sentencia T-025 de 2004). En un muestreo realizado por Pastoral Social, aparece que en Saravena un 55% son mujeres las víctimas de desplazamiento forzado y en un 57% son menores de 18 años.

Este panorama evidencia la urgencia que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional así como los gobiernos locales, adopten medidas para prevenir que la población civil siga siendo víctima de desplazamiento forzado; fenómeno que persiste a pesar de las reiteradas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo a través de los informes de riesgo y notas de seguimiento emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas.

A las amenazas de los grupos armados ilegales, se suman las vulnerabilidades en las que vive la mayor parte de la población, sobre todo campesina e indígena, con tejidos sociales y familiares afectados por el fraccionamiento, la precaria infraestructura de bienes, servicios y comunicaciones, elementos que potencian la falta de mecanismos eficaces de protección por parte de las instituciones del Estado.

Las condiciones de vulnerabilidad de la población coadyuvan para que la legitimidad y función del Estado Social de Derecho sea más precaria, permitiendo que se acreciente la influencia de los grupos armados ilegales con acciones de control económico, social y político. Durante el año 2008 se registraron 658 casos en los que colombianos solicitaron refugio en el Alto Apure Venezolano, lo que demuestra que el desplazamiento a través de la frontera tiende a mantenerse mientras persista la confrontación armada.

A las condiciones de vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento se adiciona la deficiencia en la atención de las autoridades competentes en materia de ayuda humanitaria,

rehabilitación socio laboral, atención integral en salud, entre otros elementos para la restitución de sus derechos fundamentales. Preocupa además la actitud de algunos funcionarios del nivel departamental, que niegan la confrontación armada y sus efectos en la población civil, obstaculizando las políticas y acciones de prevención y atención, lo cual aumenta la desprotección de las víctimas, al verse enfrentadas además a la ausencia de una respuesta institucional coherente. Con frecuencia, en las reuniones de las autoridades la problemática del conflicto y la violencia pasa a un segundo plano, de manera que su mención provoca malestar invitando a descalificar y desestimar las denuncias de la población, organizaciones sociales e incluso del Ministerio Público, privilegiándose en el debate aspectos como el turismo y la inversión externa y desconociéndose el deber fundamental del Estado de respetar y salvaguardar los derechos de la población.

Algunos de los hechos acontecidos en el periodo diciembre 2008 – junio de 2009, que evidencian los factores de amenaza y de vulnerabilidad a los que está expuesta la comunidad en la zona, son los siguientes:

- El 16 de Diciembre de 2008, se registró el secuestro del notario único de Saravena, Carlos Humberto Barajas, cuando salía de su casa rumbo a su trabajo en inmediaciones al parque del barrio Modelo de la capital del Sarare.
- El 18 de Diciembre de 2008, fueron asesinados por hermanos Nelson y Oscar Cárdenas Galviz, residentes en la vereda Caño Boga de este municipio.
- El 20 de Diciembre de 2008, fue asesinado Fernando Alberto Ramírez Piedrahita de 33 años de edad, mientras se jugaba la final de un campeonato de microfútbol en la cancha del barrio INCORA del municipio de Saravena.
- El 20 de Diciembre de 2008, fue asesinado Juan de Jesús Duarte Piza de 34 años de edad, en el barrio Centro del municipio de Saravena.
- El 7 de Enero de 2009, fue asesinado John Gerardo García Jaramillo de 29 años, en la vereda Villamaga de este municipio.
- El 9 de Enero de 2009, desconocidos asesinaron con arma de fuego al soldado profesional Carlos Arturo García Botello de 25 años de edad, hechos ocurridos a la altura de la carrera 16 con calle 25, del barrio 6 de Octubre del municipio de Saravena.
- El 13 de Enero de 2009, tropas del Ejército, localizaron y destruyeron un laboratorio para la fabricación de pasta base de coca, a la vez que recuperaron un vehículo que había sido hurtado al parecer por presuntos integrantes de las Farc en la vereda Buenos Aires, municipio de Saravena.
- El 14 de Enero una persona N.N. fue asesinada en el barrio La Esperanza de Saravena.
- El 20 de Enero de 2009, desconocidos asesinaron con arma de fuego a José Baudilio Esquivel de 40

años de edad, en la vereda El Pescado, zona rural del municipio de Saravena.

- El 21 de Enero de 2009, en un ataque contra una patrulla policial resultó herida una persona civil y tres uniformados aturdidos por la onda que dejó la activación de una carga explosiva en el municipio de Saravena.
- El 24 de Enero una persona N.N. fue asesinada en el casco urbano de Saravena.
- El 26 de Enero de 2009, desconocidos asesinaron con arma de fuego a Abdulio Bautista Tirado de 23 años de edad, el en el barrio Cochise del perímetro urbano de Saravena.
- El 28 de Enero fue asesinado Fernando Quintero Vásquez, en la vereda Campo Oscuro, Saravena.
- El 8 de febrero fue asesinado José Jairo Vargas, en zona rural del municipio de Saravena.
- El 9 de Febrero de 2009, fue asesinada una mujer sin identificar a la altura de la carrera 13 con calle 20 de la zona urbana de Saravena.
- El 10 de Febrero de 2009, fue asesinado el agricultor José Jairo Vargas de 41 años, en la vereda el Dique, zona rural de Saravena.
- El 12 de Febrero de 2009, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego el director de la casa de la cultura del municipio de Saravena, Orlando Pérez.
- El 14 de Febrero de 2009, desconocidos asesinaron con arma de fuego a de Pedro José Vergel Balaguera de 18 años de edad, en el barrio San Luís, municipio de Saravena.
- Entre el 15 y el 30 de Marzo de 2009, la guerrilla de las Farc decretaron “paro armado” en todo el Departamento de Arauca, restringiendo el transporte de pasajeros y carga, la movilización de personal de las compañías petroleras y el libre desarrollo de las actividades de la población civil; fueron varios los ataques perpetrados contra caravanas vehiculares acompañadas por miembros de la fuerza pública, en el municipio de Saravena.
- El 27 de marzo una persona N.N. fue asesinada en el barrio San Luis de Saravena.
- El 30 de Marzo de 2009, sicarios perpetraron el homicidio múltiple de Edwin Pacheco Hinestroza de 33 años, Jair Velasco Leal de 21 años y Luz Dary Duarte Angarita de 24 años, en el barrio Cofavi de Saravena.
- El 6 de Abril de 2009, fue asesinado Edilberto Salcedo Rojas, agricultor de 33 años de edad, en el sector de Puerto Lleras del municipio de Saravena.
- El 12 de Abril de 2009, desconocidos dieron muerte a John Jairo Monterrey de 18 años y Marcos

Merchán Hernández de 40 años, en la vereda Puerto Lleras municipio de Saravena.

- El 13 de Abril de 2009, resultaron muertos, al caer en un campo minado en la zona suburbana de Saravena, José Asunción Pérez y su hijo Cristian Eduardo Pérez, de ocho años edad, y heridas María Lucrecia Valencia, esposa y madre de los fallecidos, igualmente quedó herido su hijo Brayan Andrés Pérez de 6 años de edad; esta familia hace parte de la Población en Situación de Desplazamiento.
- El 14 de Abril de 2009, se cometió el múltiple crimen de los patrulleros de la Policía Nacional Dany Arturo Blanco y Carlos Vicente Ibaguado, quienes fueron ultimados dentro de las instalaciones del Hospital San Ricardo Pampuri de Saravena, en una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario y concretamente a la misión médica.
- Durante la última semana de Abril de 2009, miembros de la insurgencia estarían haciendo averiguaciones en las instituciones educativas sobre presuntos consumidores de alucinógenos a los que estarían advirtiendo sobre el peligro inminente que corre su vida si continúan con el consumo de drogas ilícitas.
- El 2 de Mayo de 2009, fue asesinado Pedro Vicente Corredor, en la vía que conduce de Saravena a la Esmeralda.
- El 9 de Mayo se presentó una nueva captura masiva en el municipio de Saravena. De acuerdo con las informaciones entregadas por las autoridades, las personas privadas de la libertad al parecer eran milicianos de las Farc y el ELN.
- Entre el 26 de Mayo y el 1º de Junio la insurgencia de las Farc ordenó la realización de un paro armado para conmemorar los 45 años de su fundación como grupo alzado en armas coincidiendo su realización con las elecciones atípicas para gobernación del Departamento.
- El 12 de junio de 2009, ocurrieron dos homicidios en el casco urbano de Saravena: el primero de dejó como víctima al señor Ramiro Castellanos Mantilla, en el sitio conocido como El Ganadero, y el segundo ocurrió en el Barrio Las Flores, donde fue atacado con arma de fuego Alexis Moreno, de 26 años de edad, quien falleció el día 15 de junio, por la gravedad de las heridas.

El Defensor del Pueblo, doctor Vólmar Pérez Ortiz, se ha pronunciado en tres ocasiones (5 de Diciembre de 2008, 26 de Diciembre de 2008 y 15 de Abril de 2009), para llamar la atención de las autoridades sobre el elevado riesgo y vulnerabilidad en que se encuentra la población civil del Departamento de Arauca. El Defensor de Pueblo ha señalado que a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades civiles y la Fuerza Pública, aún persisten en el departamento graves vulneraciones a los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la integridad de la población civil que agravan la crisis humanitaria en Arauca.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo desde el año 2006 ha advertido sobre la

dinámica de la confrontación armada en el departamento Arauca, así como de las posibles violaciones a los derechos fundamentales de la población civil. La más reciente advertencia se realizó en el Informe de Riesgo N° 020-08, del 14 de Septiembre de 2008, y la Nota de Seguimiento N° 007-09, de mayo 8 de 2009, donde se advierte el riesgo para mandatarios locales, Diputados a la Asamblea de Arauca, concejales municipales, servidores públicos, líderes sociales y, políticos, de Arauca, Saravena, Tame, Arauquita, y Fortul, y en la quinta Nota de Seguimiento, del 21 de abril de 2008, al Informe de Riesgo N° 032-06A.I, que se encuentra vigente para los municipios Saravena, Fortul, Tame y Arauquita.

Los hechos anteriores evidencian que tanto las Farc como el ELN y los nuevos grupos armados ilegales post-desmovilización de las AUC, tienen una capacidad militar y financiera que les permite seguir desarrollando su accionar violento en Saravena, poniendo en situación de riesgo permanente a la población civil, lo cual amerita se adopten medidas que trasciendan las medidas policivo – militares y se implementen por parte de las autoridades e instituciones de carácter civil las políticas y programas que propendan por la superación de los problemas estructurales de esta municipalidad y la intervención de los organismos internacionales a efecto de atender la crisis humanitaria que sufren los pobladores de Saravena.

Como factores de protección que contribuyen a enfrentar los actos violentos de los grupos irregulares se destacan los operativos del Grupo Mecanizado Gabriel Reveíz Pizarro (sus Batallones de Contraguerilla) de la XVIII Brigada del Ejército Nacional que hacen presencia en el Municipio y de la Policía Nacional que cuenta con una estación. En conjunto, la Fuerza Pública y las autoridades civiles municipales realizan periódicamente Consejos de Seguridad para analizar la situación, sin embargo las medidas adoptadas no han resultado suficientes para garantizar el respeto por la vida y la integridad de los habitantes del municipio.

Desde la acción humanitaria, sobresale la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, subdelegación Saravena, que ha brindado asistencia humanitaria de emergencia efectiva y oportuna a la población en situación de desplazamiento. Asimismo, las actividades que desarrollan en el departamento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), CIPS, La Cáritas (Colombiana y Arauca), que realizan un trabajo continuo de acompañamiento y fortalecimiento comunitario en el municipio.

La Conferencia Episcopal de Colombia, por medio de la comisión de Conciliación Nacional y la Diócesis de Arauca, en diálogos pastorales autorizados por el Gobierno Nacional, han hecho seguimiento a la crisis humanitaria generada por la confrontación armada, buscando crear espacios de diálogo como facilitadores en la consecución de acuerdos entre las partes en confrontación y han hecho recomendaciones precisas a los grupos insurgentes sobre la estricta observancia del Derecho Internacional Humanitario y del respeto por la vida, sobre todo de la población civil.

El Ministerio Público por medio de la Defensoría del Pueblo Regional y el proyecto Redes Territoriales de Apoyo Defensorial, y la Personería Municipal, impulsan la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho mediante las siguientes acciones: promoción y divulgación de los derechos humanos, defensa y protección de los derechos humanos, divulgación y promoción del

Derecho Internacional Humanitario, promoviendo así la cultura preventiva frente al riesgo e impacto que generaría el accionar de los grupos armados ilegales en las zonas señaladas.

Por lo expuesto anteriormente, la situación de riesgo de la población civil del municipio de Saravena es de nivel alto, por lo que es probable que ocurran homicidios selectivos y múltiples (masacres), enfrentamientos armados con interposición de población civil, extorsiones, secuestros, pillajes, destrucción de bienes civiles, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, secuestros y desplazamientos forzados de la población.

NIVEL DEL RIESGO: ALTO

☒

MEDIO

☐

BAJO

☐

AUTORIDADES VINCULADAS AL DEBER DE PROTECCIÓN

AUTORIDADES CIVILES: Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Alcaldía de Saravena, Secretaría Municipal de Gobierno, Agencia Presidencial para la Acción Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Personería Municipal.

FUERZA PÚBLICA:

- EJÉRCITO: Segunda División: Brigada XVIII – Grupo de Caballería Mecanizado Gabriel Reveíz Pizarro.
- POLICÍA NACIONAL: Regional V de Policía, Departamento de Policía de Arauca, Comando Municipio de Saravena.

RECOMENDACIONES

Previo estudio del presente Informe, se solicita al CIAT emitir la correspondiente **ALERTA TEMPRANA** y orientar la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo descrita, con el fin de proteger la población civil y brindar la atención humanitaria requerida. En especial consideramos necesario recomendar:

1. Al Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa Nacional, a la Gobernación de Arauca y Alcaldía del Municipio de Saravena, coordinar las acciones necesarias y en complementariedad con los programas de prevención y protección, orientadas a mitigar y controlar el impacto de las acciones de los grupos armados ilegales que operan en el municipio y que afectan la situación de derechos humanos de sus habitantes, en especial de los pueblos indígenas asentados en el municipio de Saravena, teniendo lo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en los Autos 004 y 008 de 2008.

2. Al Ejército Nacional - Brigadas XVIII – Grupo de Caballería Mecanizado Gabriel Reveíz Pizarro, para que refuercen los operativos de control en Saravena, que garanticen la seguridad y la protección de los derechos humanos de los habitantes de este municipio.

3. A la Policía Nacional, para que ejerza un mayor control en el área urbana de Saravena (incluso en el centro Poblado de Puerto Nariño) que garantice la seguridad de todos los habitantes del área urbana, así como el ejercicio de sus actividades comerciales, indispensables para desarrollar un entorno de seguridad y convivencia pacífica.

4. A las Fuerzas Militares, de Policía y organismos de seguridad del Estado con presencia en el municipio, se recomienda dar cumplimiento efectivo a las directivas del Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, particularmente en lo relativo a no involucrar a la población civil en actividades como estafetas, informantes u otra forma de participación, en especial a menores de edad; garantizar los derechos de las personas capturadas, especialmente al debido proceso; no permitir que las tropas cometan excesos o atropellos contra la población, incluidas declaraciones o señalamientos infundados contra sus miembros o líderes, así como abstenerse de ejercer acciones que pongan en peligro la integridad de la población, tales como bombardeos o ametrallamientos indiscriminados; brindar a los denunciantes información completa y oportuna sobre hechos, personas implicadas, etc., relacionada con presuntas violaciones de los derechos humanos y adelantar las investigaciones disciplinarias y penales oportunas para clarificar los hechos e imponer las sanciones que correspondan.

5. Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Alto Comisionado para la Paz y a la Gobernación de Arauca, para que con el acompañamiento de Organismos Internacionales y otras instituciones del Estado, se cree un espacio de concertación especial para el departamento de Arauca, que discuta y proponga acciones urgentes para resolver la grave crisis humanitaria en el departamento, manejando aspectos políticos, sociales y de conflicto armado.

6. A la Agencia Presidencial para la Acción Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, SENA, Secretarías de Educación y Salud, coordinar las acciones pertinentes con enfoque diferencial para la atención a la población en situación de desplazamiento, sobre todo a mujeres, niños, niñas y adolescentes y, adoptar las medidas que faciliten la inscripción de las personas desplazadas en el SIPOD, de tal forma que se les brinde atención humanitaria de emergencia y se les vincule a procesos de restablecimiento en condiciones de integralidad.

7. A la Gobernación del Departamento de Arauca y la Administración Municipal de Saravena, para que tomen medidas y se desarrollen acciones urgentes tendientes a garantizar la gestión de proyectos y programas de desarrollo social y proyectos de autosubsistencia y recuperación socio laboral, con énfasis en salud, educación, fomento de la agricultura y la ganadería como iniciativas de desarrollo de la comunidad a fin de reactivar la economía de las familias que se han desplazado o que se encuentran en riesgo de desplazamiento.

8. Al ICBF y al Programa Presidencial Colombia Joven para que diseñe políticas claras y construya alternativas viables que permitan que en el municipio ningún niño, niña o adolescente menor de 18 años resulte vinculado directa o indirectamente a la Fuerza Pública, fuerzas armadas paraestatales, grupos armados o bandas emergentes, o grupos insurgentes, prevenir que esto ocurra, y propender

porque las instituciones competentes y las agencias intergubernamentales (UNICEF) que se encargan del tema emprendan acciones integrales para su protección y atención.

9. Al Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, coordinar, con las autoridades competentes, el diseño y ejecución de programas de desminado humanitario de campos cercanos a la zona urbana, a los centros poblados, a escuelas y centros de salud, entre otros bienes protegidos, así como la protección y asistencia a las víctimas de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar, en aspectos como atención de urgencias, rehabilitación física y psicológica, rehabilitación laboral y reincorporación social, subsidios e indemnizaciones consagrados en la ley. Igualmente, coordinar la aplicación de estrategias para la educación en el riesgo de minas (ERM).

10. Al INCODER, el IGAC y la administración municipal, para que en el marco del Decreto 2007 de 2001, establezcan conforme al artículo 1º, la, "*Declaratoria de la inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado (...) que permita establecer (...) limitaciones a la enajenación o transferencia a cualquier título de bienes rurales*". Con el objeto de proteger la población de actos arbitrarios contra su vida, integridad y bienes patrimoniales.

11. A la Vicepresidencia de la República para que dinamice desde el ámbito nacional y departamental, acciones de acompañamiento humanitario a las poblaciones en riesgo por parte de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.

12. A la Oficina de la MAPP/OEA, se le debe informar sobre las acciones de las nuevas estructuras armadas ilegales, para que en cumplimiento de su mandato verifique el cumplimiento de los acuerdos entre las AUC y el Gobierno Nacional y determine el origen y objetivos de las nuevas agrupaciones armadas. Asimismo se ponga en conocimiento de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de las Personas y Grupos Alzados en Armas, para que haga seguimiento a las actividades de los desmovilizados y se adopten medidas para el cumplimiento de los beneficios y compromisos adquiridos con los que depositaron las armas.

13. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que tomen las medidas necesarias frente a las solicitudes de refugio en la frontera con Venezuela y las posibles deportaciones o repatriaciones que se realicen, en especial, cuando las condiciones de seguridad no estén dadas y atenten contra la población. De igual manera, para que se brinde protección a los colombianos que sean reconocidos como refugiados en la república Bolivariana de Venezuela.

JORGE ENRIQUE CALERO

Defensor Delegado Para la Evaluación de Riesgos de la
Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado